

Dispatches **BOLIVIA CANADA COLOMBIA GUATEMALA PALESTINE PARGUAY PERU TURKEY**



Carmen Beatriz Ruiz

BOLIVIA

Entre pandemia y política

El 21 de marzo pasado, el gobierno boliviano promulgó el Decreto Supremo 4196 que determina “emergencia sanitaria y cuarentena nacional” en todo el territorio contra el brote del coronavirus COVID-19. La norma establece las disposiciones de aislamiento social, restricciones de movilización y bonos de ayuda monetaria para los sectores de la población más afectados económicamente.

Posteriormente se aprobaron nuevos Decretos que ampliaron la cuarentena nacional, fijaron un bono universal de 500 bolivianos (USD\$70) para personas que no reciben ningún tipo de ingreso fijo, y establece la estrategia de “cuarentena dinámica” a partir del 11 de mayo con la aplicación de tres tipos de apertura según criterios de riesgo alto, medio y moderado, para mantener o flexibilizar las restricciones y normar la forma de trabajo de los sectores de la industria, minería, manufactura, construcción y agropecuaria.

La población boliviana acató las restricciones en general con disciplina, salvo dos brotes de resistencia violenta que, aunque aminoraron con el tiempo, mantienen su renuencia. Uno en la zona de El Chapare, zona de producción de coca en el departamento de Cochabamba y bastión principal de apoyo al ex presidente Evo Morales y a su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS). El otro en la ciudad de El Alto, a media hora de La Paz, sede de gobierno y un centro muy importante de comercio informal y apoyo al MAS. En ambos casos se trata, además, de zonas sospechosas de vinculación con la producción y comercio de cocaína.

En la situación general destacan aspectos estructurales relacionados con los derechos humanos. Por un lado, las condiciones dramáticamente deficitarias de la infraestructura de salud en el país (instalaciones hospitalarias, laboratorios, dotación de medicinas y atención de emergencias), por otro, la situación de grupos importantes de población migrante que, proveniente de países vecinos, aspira a regresar a Bolivia, lo cual supone para los posibles municipios de destino exigencias específicas de aislamiento y supervisión, y lidiar con el rechazo de la vecindad local, temerosa de contagios. Finalmente, y no es un dato menor, se calcula que más de la mitad de la población boliviana está inserta en el sector informal de la economía, que significa vivir de ingresos irregulares y trabajar en espacios abiertos e inseguros.

Adicionalmente, en Bolivia se enfrenta la pandemia del COVID-19 desde diferentes frentes y con distintos actores, a veces abiertamente confrontados a partir de sus diferencias políticas y administrativas. El reconocimiento mundial de la pandemia llegó Bolivia a pocos meses de instaurado el gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Añez, precisamente cuando su “luna de miel” con la ciudadanía se deterioraba a raíz de preocupante ineficiencia administrativa y casos de corrupción en el manejo de algunas áreas del Estado. Esta correlación conflictiva se ha agudizado con la decisión de la presidenta Añez de postularse como candidata en las elecciones generales que probablemente se realizarán este año. Un hecho que contamina su gestión difuminando los límites entre acciones de gobierno y acciones de campaña.

En ese marco, políticos de oposición y analistas políticos claman, sin resultado, porque se construyan alianzas y acuerdos de gobernabilidad para un necesario acuerdo nacional mínimo entre los tres niveles de gobierno y entre los poderes ejecutivo y legislativo, que desde noviembre del año pasado se mantienen en una relación duramente contaminada por la confrontación entre el gobierno y el MAS.

Como se ve, el COVID-19 no es el único gran problema que enfrentamos en Bolivia.

CANADA

Protecting Privacy Rights in the Fight Against COVID-19

The Canadian government has begun to explore the use of digital contact tracing methods through mobile apps in an effort to slow and prevent the spread of COVID-19. Such apps work by monitoring people's movements through cellphone data collection and alerting them if they have potentially been exposed to the virus. Digital contact tracing is appealing as it has the potential to be quicker and more efficient than traditional contact tracing methods. However, digital contact tracing could have significant repercussions for privacy rights.

Digital contact tracing applications must be designed and implemented properly in order to proportionally address public health needs while protecting privacy rights. The International Civil Liberties Monitoring Group issued a joint statement calling on the Canadian government to follow seven principles to protect privacy rights when considering digital data collection ([Joint Statement, April 2020](#)). The principles include: (1) prioritizing approaches without surveillance or data gathering; (2) ensuring due process for any new powers adopted; (3) preferring initiatives that rely on voluntary consent; (4) strict limitations on data collection and retention; (5) strict limitations on use and disclosure; (6) providing independent oversight, transparency and accountability; and (7) ensuring security, law enforcement or intelligence agencies do not receive authorization to carry out COVID-19 related surveillance efforts. Similar concerns were raised by the Office of the Privacy Commissioner of Canada including the importance of considering how digital data collection could contain inherent biases that disproportionately impact vulnerable populations ([Privacy Framework, April 2020](#)).

The province of Alberta has already launched a voluntary mobile app called ABTraceTogether which uses Bluetooth to monitor contact with other nearby phones using the app ([The Globe and Mail, May 2020](#)). Individuals who test positive for COVID-19 can then upload the data to Alberta Health Services, which can be used to notify people who were in close contact. The data is encrypted on the user's phone and deleted after three weeks. ABTraceTogether does not collect any geo-location data from users. Similar technology is being developed by a Montreal-based AI Institute called Mila. Mila's app promises to protect privacy by deleting data on phones every thirty days and wiping the AI server every three months ([Global News, May 2020](#)). While the apps seem to incorporate some security features, researchers have found that it is possible to re-identify individual users even from anonymized data sets and Bluetooth is susceptible to security breaches ([Nature Editorials, May 2020](#)).

Privacy issues may be exacerbated if there are multiple collection techniques rather than one nationally used app. While Alberta has already launched their app, other provinces prefer to use traditional contact tracing methods. The use of multiple applications could create inconsistent national data and different provincial privacy standards.

The possible benefits of digital contact tracing for public health cannot be used to overshadow the importance of maintaining privacy rights and civil liberties. Therefore, the Canadian government must ensure accountability and transparency throughout the use of digital contact tracing methods.



Jadden Howell,
Intern at JGG through
the Faculty of Law,
University of Ottawa



César Torres

COLOMBIA

COVID-19 y cambio político

Para enfrentar la pandemia del Covid-19, el gobierno colombiano decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Ese estado de excepción le dio amplias facultades legislativas al poder ejecutivo y, particularmente, al presidente Iván Duque.

El Estado de emergencia duró un mes y se inició el 17 de marzo de este año. Durante este periodo el poder ejecutivo dictó 106 decretos, 34 de los cuales fueron dictados en sólo tres días (13, 14 y 15 de abril).

Aunque muchas de las decisiones tomadas mediante esos actos legislativos afectan significativamente la vida económica, política y ambiental del país, éstos no fueron sometidos al debate. Ni al debate con la ciudadanía que debe permanecer recluida, ni al debate en Cámara y Senado porque no fueron convocados.

Literalmente el gobierno legisló de espaldas de la gente y del Congreso de la República. No se pudo ni opinar, ni protestar, ni hacer control parlamentario.

Y, aún hoy, el partido de gobierno se niega a hacer sesiones parlamentarias presenciales. Cada vez son más los periodistas y líderes de opinión que dicen y demuestran que Colombia va camino a convertirse en una dictadura que respeta sólo las formas de la democracia.



Paola Jiménez

COLOMBIA

Retos para atender las necesidades de las mujeres durante el COVID-19

La emergencia causada por la pandemia constituye un hecho sin precedentes frente al cual el gobierno colombiano y los gobiernos del mundo se encontraron desprovistos de políticas y estrategias de atención efectivas. Esta situación es inclusive más dramática para los gobiernos territoriales los cuales, si bien siguen directrices generales del nivel nacional, actúan de manera autónoma y descentralizada. Estos gobiernos deben aprestar sus sistemas de respuesta sin contar, en muchas ocasiones, con los recursos necesarios. En el contexto de estas dificultades, reconocer y atender las necesidades específicas de las mujeres se ha convertido en un verdadero desafío que devela las carencias estructurales previas a la emergencia.

Existen dos grandes áreas que deben reconocerse y en las que deben adoptarse medidas urgentes ante el eminente riesgo de profundizar fenómenos como la feminización de la pobreza, la brecha salarial y la violencia institucional, esta última entendida como una revictimización de las mujeres.

Una primera dimensión, de carácter socioeconómico, implica que los municipios y departamentos focalicen su gestión basándose en las evidencias que existen sobre el efecto desproporcionado que tendrán las medidas de confinamiento sobre los medios de vida de las mujeres, especialmente las jefas de hogar no unidas. Es fundamental que los municipios y departamentos realicen su planeación técnica, presupuestal y participativa a partir de los datos oficiales disponibles y actualizados, antes y durante la emergencia, en materia de: i) economía del cuidado; ii) la participación de las mujeres en la economía informal; iii) la concentración de los índices de pobreza y pobreza extrema en hogares encabezados por mujeres; y iv) la feminización de empleos especialmente afectados por la crisis económica (particularmente el trabajo doméstico). Estas consideraciones deben integrarse como criterios de primer orden en las medidas de recuperación de las economías locales y las estrategias redistributivas que se han venido anunciando.

Una segunda dimensión se enfoca en las capacidades de los gobiernos locales para activar sus rutas de atención para mujeres víctimas, garantizando de manera integral su derecho a vivir una vida libre de violencias. Durante la cuarentena los reportes por violencia intrafamiliar aumentaron en un 175% ([Vicepresidencia de la República de Colombia, Mayo 2020](#)), lo cual evidencia la necesidad de establecer nuevas estrategias de fortalecimiento integral a nivel territorial. En especial, se requiere mejorar los sistemas de información y las líneas de atención para atender adecuadamente: i) las violencias ocurridas en el ámbito familiar exacerbadas por la imposibilidad de las mujeres de alejarse de su agresor y la profundización de su dependencia económica; ii) los riesgos de explotación laboral y sexual de mujeres y niñas ante la precarización de sus medios de subsistencia; iii) los riesgos de violencias contra las mujeres migrantes dada la habilitación de pasos fronterizos irregulares; y iv) el aumento de violencias por exposición no consentida en medios virtuales.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la pandemia puede ser una oportunidad para que los municipios reenfoquen sus políticas de igualdad de género a partir de criterios técnicos, estándares de derechos humanos y una lectura más precisa de un contexto local que ha cambiado y que se verá impactado en el mediano y largo plazo.

GUATEMALA

COVID-19, derechos humanos y democracia: fondo y figura

Con la pandemia del COVID-19 la humanidad y sus sistemas políticos enfrentan una amenaza de enormes proporciones y de diversas repercusiones en las formas de vida. El Estado y la sociedad guatemalteca no son la excepción. Si bien –en comparación con otros países– hasta la fecha Guatemala tiene pocas personas contagiadas y defunciones, ya hay consecuencias y vendrán más.

Ante la emergencia, el gobierno de Guatemala y el Congreso de la República echaron mano de poderes extraordinarios para ampliar el presupuesto nacional y disponer de 11 mil millones de quetzales, financiados a través de endeudamiento público, por medio del Banco de Guatemala. Estos recursos servirán para atender los casos de COVID-19 y los impactos económicos de la pandemia.

Para garantizar el distanciamiento social el gobierno tomó la ruta sugerida por los expertos y restringió, entre otros, los derechos a la movilidad, la asociación, las actividades laborales y el comercio; dispuso el cierre de fronteras, la suspensión del transporte público, la cuarentena y el toque de queda.

En otras circunstancias ese comportamiento gubernamental sería rechazado por antidemocrático, pero hasta hoy las medidas tienen la aceptación legítima de la mayoría de la población y en contraste, la desaprobación y la alarma de las cámaras empresariales que no están para atender la evidencia científica sobre el manejo de la pandemia, pero sí para guiarse por el pánico que les produce aceptar que el futuro tendrá números rojos.

Aunque algunos alcaldes municipales han flexibilizado las medidas apelando a la autonomía reconocida por la Constitución Política de la República, en ningún caso esas decisiones han derivado en una confrontación con el gobierno central o puesto en riesgo la gobernabilidad democrática.

Sin embargo, la pandemia también saca a la superficie la deuda que el Estado, secularmente débil, tiene con la mayoría de la población. Es decir, garantizar la protección de la persona y la familia, la realización del bien común y la garantía de la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y el desarrollo integral de la persona según la Constitución Política de la República.

La pandemia ha evidenciado que el debilitamiento de los servicios públicos de salud, tarde o temprano, habría de cobrar factura; y las banderas blancas en frente de casas en todo el país y las que son enarboladas en varios de los principales bulevares de la ciudad capital informan a algunos y recuerdan a otros que el bienestar es un asunto del pequeño número de familias VIP que conforman las capas altas y medias-altas de este país.

Para el resto de las familias además de los riesgos a la salud, los derechos a la alimentación, la educación, los servicios básicos, la participación en los asuntos de su interés y tantos más, son letra muerta. Reflexionar sobre los impactos de las respuestas al COVID-19 en los derechos humanos y la democracia en Guatemala requiere ver la figura que dibuja la crisis y, quizá más importante, el fondo de la constante violación de los derechos de la mayoría de la población.



Fuente: Prensa Libre, Wilder López



Otto Valle

PALESTINE

Human Rights under Occupation and COVID-19

In 1967, Israel occupied the West Bank, including East Jerusalem and the Gaza Strip, known as the Occupied State of Palestine. Israel's 53-year-long military rule of nearly 5 million continues to undermine the well-being of Palestinians. The spread of COVID-19 has further exacerbated civil, political, social, economic, and cultural, human rights violations.

On March 5, 2020, the Government of Palestine, following the detection of the first cases of COVID-19 infections, declared a one-month State of Emergency across the country. Under the lockdown, unemployment increased and further restrictions on mobility were imposed. Heightened tensions, fears, and anxieties have created more demand for already limited services, bombarding an under-equipped health sector, and exacerbating an existing fiscal crisis caused by Israel's withholding of Palestinian revenues.

Civil and political rights and humanitarian law violations during the first month of the lockdown included: the killing of 3 Palestinians by the Israeli army, demolishing or confiscating of 47 structures, arresting 267 Palestinians, numerous settler attacks, and over 238 incursions and raids ([P.L.O. Negotiations Affairs Department, April 2020](#)). Furthermore, Israel has not yet released Palestinian prisoners in Israeli jails despite various calls for the release of the ill, elderly, women, and children. Visits to prisoners were also halted without providing an alternative such as virtual meetings.

The Gaza Strip, one of the most densely populated areas in the world with soaring poverty and food insecurity, faces the highest risk by COVID-19. The Israeli siege hinders Palestinian mobilization of any available health resources in the case of an outbreak. In Area C, which is under full Israeli control, and in East Jerusalem neighborhoods that were separated from the city because of Israel's annexation wall, community infrastructure and services are lacking. Hospitals are limited while testing facilities, equipment and medicines are in shortage.

In East Jerusalem, Israel closed a neighborhood clinic set up by Palestinian medical teams for COVID-19 testing for allegedly using test kits from the Palestinian Authority. Israeli forces have also been carrying out arrests of Palestinians involved in COVID-19 prevention efforts against the virus (e.g. distributing leaflets, sterilization of the streets).

The COVID-19 crisis will have a negative impact on the present and future economic and social rights situation in Palestine. Palestine has been facing difficulties due to insufficient funds to cover scheduled government transfers to the most vulnerable population. It is estimated that over 120,000 families are currently in need of assistance ([Palestine Ministry of Social Development, 2020](#)). This number is expected to rise as a result of the deteriorated economic crisis due partly to COVID-19. Palestine also needs to expand its social safety net to enable citizens to comply with the government's protection and virus containment measures as well as to support those who lost their jobs, small-medium enterprise owners, and the self-employed.

While most of the world has been focusing on COVID-19, the focus of the recent Israeli new "unity government" has been on further illegal annexation of occupied Palestinian land. This government declared July 1, 2020 as the go-ahead date for the implementation of its annexation plans that target areas around East Jerusalem, the Jordan Valley, and selected settlements in the West Bank. Annexation will further compromise a quarter of century long peace process. The future impact of this crisis is yet to be seen.

PARAGUAY

Impactos del COVID-19 en las mujeres del Cono Sur

La pandemia del COVID-19, ha modificado radicalmente el modo de vivir de todos los seres humanos a nivel mundial. Estos cambios drásticos –que requieren el alejamiento social, un aislamiento prolongado en el ámbito doméstico, así como la exacerbación de la higiene personal, domiciliaria y el cuidado de personas dependientes de la familia– han retrotraído a las mujeres a una realidad anterior, tanto en su desarrollo personal como en el estadio de la democratización de las familias y sociedades.

Una circunstancia por demás surrealista, la expansión de un virus imparabable como el COVID-19 dejó en evidencia que todo el camino transitado por las luchas y conquistas feministas no fue suficiente. Hoy,



Varsen Aghabekian

dispatches



Carmen Colazo

recluidas en el hogar, las mujeres ven triplicadas o cuatriplicadas sus tareas domésticas –que aún los hombres no asumen como responsabilidades importantes– debiendo así extremar la limpieza del hogar para lo cual generalmente utilizan sustancias tóxicas; e intensificar el cuidado de las niñas y niños, a quienes no solo hay que vestir, higienizar y alimentar, sino que también hay que supervisar en sus clases virtuales que ahora toman desde casa. Asimismo, deben atender sus teletrabajos y hacer compras con las precauciones necesarias para no contagiar a los suyos, ya sea al entrar a comercios o mediante entregas a domicilio, todo ello en un estado de gran culpabilidad e incertidumbre.

En Chile la encuesta “Data Influye” reveló que las mujeres son quienes están siendo las más agobiadas por la pandemia. En general las mujeres respondieron con mayor frecuencia sentirse ansiosas (30% mujeres, 25% hombres), angustiadas (21% mujeres, 16% hombres) o con miedo (12% mujeres, 9% hombres) en relación a la crisis sanitaria del COVID-19. Además, aproximadamente el 82% de las mujeres consideran que la pandemia es más grave o mucho más grave de lo que esperaban, lo cual supera la percepción de los hombres en 7 puntos. Finalmente, el 38% de las mujeres consideran que la economía del país no se recuperará en más de 2 años, superando la percepción de los hombres en 10 puntos ([Data Influye, Abril 2020](#)). Estos datos son aún más relevantes considerando que Chile cuenta con un 42,4% hogares encabezados por mujeres, los cuales se caracterizan por elevados niveles de pobreza, y con una brecha salarial promedio de 22% a favor de los hombres ([Observatorio de Género y Equidad de Chile, Abril 2020](#)).

Como si esto no fuera suficiente, mujeres sufren en esta cuarentena la “tradicional” violencia doméstica, pero ahora a tiempo completo. En Buenos Aires las estadísticas refieren un aumento de casos de feminicidios, lo que ha dado lugar a 108 feminicidios en lo que va del año 2020 (incluidos los de mujeres transgénero); 45 dentro de la cuarentena ([Agencia EFE, Mayo 2020](#)). Ante esta situación algunas organizaciones de este país han pedido la declaración de emergencia por violencia de género a nivel nacional. Igualmente, aumentaron las denuncias de casos de *grooming* y abuso sexual infantil algunos cometidos telemáticamente por maestros. Otro dato alarmante es que tan solo en el mes de la cuarentena se constataron en el país la misma cantidad de casos de abuso y violencia por medios virtuales que se producía en un año (Ministerio de Justicia de Argentina y Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia).

Por su parte, el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha calificado el repunte de la violencia intrafamiliar y de género en cuarentena por COVID-19 como “horroroso,” pidiendo a los gobiernos que desarrollen de manera urgente, políticas preventivas para impedirla. Esto refleja cuánto falta aún para que la igualdad por razones de sexo/género sea una realidad.

PERU

El COVID-19 y las oportunidades de fortalecer la gobernanza

El Perú es uno de los países latinoamericanos más afectados por el COVID-19. A la fecha hay más de 279 419 personas contagiadas y 9 317 fallecidas ([Ministerio de Salud del Perú, 29 Junio 2020](#)), con un subregistro en el número de decesos. Más allá de las buenas intenciones presidenciales, la pandemia puso en evidencia la fragilidad del sistema de salud y su actual colapso, así como la debilidad de la institucionalidad tanto pública, como política y social.

Mejores condiciones habrían podido darse si se hubiese creado un escenario de fortalecimiento de las relaciones de cooperación y diálogo entre el gobierno y la sociedad civil para asumir consensuadamente las acciones sanitarias, sociales y económicas derivadas de la pandemia. No es suficiente que el gobierno pida confianza y tranquilidad en sus mensajes y que la población se quede en casa respetando las medidas preventivas. La realidad del país de informalidad extrema, de débil ciudadanía, de falencia institucional, de inseguridad ciudadana, de ausencia de ingresos, entre otros factores, condujo rápidamente al desborde social y al desacato a los protocolos formalmente establecidos.

En este contexto, la pandemia nos vuelve a mostrar que cualquier respuesta a los grandes problemas de países como el Perú requiere de alianzas, acuerdos, compromisos entre los actores públicos, sociales y empresariales que estén dispuestos a asumir soluciones compartidas. Si los esfuerzos gubernamentales hubieran integrado a las organizaciones sociales diversas, de productores, comerciantes, pequeños empresarios, barrios, jóvenes y mujeres, los resultados frente a la pandemia serían otros. No solo se hubiera



Carlos Herz

podido reducir la letalidad sino que se habría generado un clima de mayor confianza, de cooperación y solidaridad, tan necesario en el país.

Bastaba con observar el cúmulo de iniciativas que las organizaciones campesinas desplegaron en diversas zonas rurales, sin mayor presencia efectiva del aparato público, estableciendo sus propios protocolos y pautas para su protección, sus mecanismos comunales de organización y control y la gestión de sus estrategias económicas locales. Solo como ejemplo, en seis departamentos del sur peruano de mayor porcentaje poblacional rural, el número de decesos no ha llegado ni a 10 hasta la fecha.

Una vez más las lecciones nos conducen a resaltar la importancia de construir y fortalecer la gobernanza local, esta vez para hacer frente a una crisis que ha mostrado las grandes falencias del actual modelo de acumulación y globalización.

TURKEY

LGBTI Rights Amid the COVID-19 Crisis in Turkey

In addition to the shadows looming over Turkey's already rattled economy, the coronavirus pandemic and the ensuing health crisis seem to have given rise to heightened homophobia and transphobia as prominent government-related figures make hateful remarks in an attempt to look for a scapegoat for the country's woes.

During one of his recent Friday sermons focusing on the pandemic and its causes, the head of the Religious Affairs Directorate (Diyanet), Ali Erbaş, said that Islam condemns adultery and homosexuality because they "bring disease and corrupt generations."

Erbaş's claims drew criticism from Turkey's progressives including human rights groups and bar associations, who accused Erbaş of inciting hatred against Turkey's vulnerable LGBTI community and HIV-positive citizens. However, senior government figures, including President Erdogan himself, as well as deans of theology faculties and the mainstream media (mostly controlled by government) threw their weight behind Erbaş. Indeed, Turkish prosecutors have found no reason to investigate the head of the Religious Affairs Directorate leader for his comments targeting the LGBTI community and HIV-positive individuals. On the contrary, prosecutors immediately started to launch probes into the Ankara and Diyarbakır Bar Associations because of their pronouncements critical of Erbaş's statements, claiming that the bar associations "belittled the religious values adopted by a part of the Turkish society." Furthermore, following this rift between Turkey's government and the bar associations, Erdoğan revealed his government's intentions to change the law regarding the electoral practices of professional organizations, stating "Recently we have witnessed the impudent attacks of the Ankara Bar Association and structures of the same mentality. Just this example alone has exhibited the urgency of the revision regarding professional organizations' election system" ([Duvar English, May 2020](#)).

Yet another symbol of Turkey's societal division is the recent row over the rainbows. In an attempt to lift the spirits in the face of the coronavirus pandemic Turkish schoolkids (as elsewhere) were encouraged to draw. However, the children's drawings of rainbows led some local education boards to put an end to the initiative citing an imagined "plot" to turn children gay. Instead of boosting morale, the rainbows have become the latest cultural battleground in a country highly polarized along political and religious lines.

Neither adultery nor homosexuality is illegal in Turkey. However, following several years of progressive changes – including the ratification of the Istanbul Convention – anti-LGBTI and anti-feminist rhetoric has increased. Indeed, the Istanbul Convention itself has come under attack in the recent years, with claims that it is disrupting family unity and ethics. These claims have been accompanied by visible changes in the government discourse and use of terminology in a regressive way with "gender equality" becoming an unwanted phrase. For example, unlike the previous plan, Turkey's 11th development plan refers to "equality between women and men" instead of "gender equality".

In addition to the rise of conservative politics and usual approaches of shifting the blame, the coronavirus crisis seems to have provided yet another pretext to solidify the anti-LGBTI sentiment and a revoking of sexual orientation and gender identity rights from LGBTI communities.



Zeynep Baser

Opinión

QUESTIONS FROM JGG | ANSWERS BY TIM MCSORLEY



Tim McSorley is National Coordinator of the International Civil Liberties Monitoring Group (ICLMG).

The International Civil Liberties Monitoring Group (ICLMG) is a national coalition of Canadian civil society organizations that was established after the adoption of the Anti-Terrorism Act of 2001 in order to protect and promote human rights and civil liberties in the context of the so-called “war on terror.” The coalition brings together 47 NGOs, unions, professional associations, faith groups, environmental organizations, human rights and civil liberties advocates, as well as groups representing immigrant and refugee communities in Canada. <https://iclmg.ca/>

JGG: Why are human rights and democratic mechanisms so vulnerable amid health emergencies such as the COVID-19 pandemic?

Tim McSorley: It’s important to recognize that even outside of a time of emergency, human rights protections and democratic institutions are often partially or completely unavailable for a large portion of the population. We see this lack of access in our work on national-security related issues at the ICLMG, including racial profiling, diminished rights due to surveillance and secret trials, and restrictions on fundamental rights like freedom of expression, assembly and movement. This issue plays out in other sectors on a daily basis as well: unequal access to health care, working conditions that undermine physical and mental health, discrimination in the health system, among other concerns.

When we are confronted with a health emergency like the COVID-19 pandemic, these rights suffer an entirely new level of threat: systems that were already complicated to navigate become even more difficult as both service providers and service users are attempting to adapt to an entirely new situation. Furthermore, ICLMG has documented how the “emergency” of the so-called “War on Terror” has given cover for governments to limit access to democratic mechanisms and to undermine human rights. In times of emergency, the public is urged to forego their rights, often on a

proposed temporary basis, in order to confront the greater enemy – only to see the restrictions become permanent. While COVID-19 indeed presents a formidable danger to the public that justifies some extraordinary actions, we have also seen numerous instances of far-reaching emergency power legislation that places severe restrictions on speech, association and movement, grants governments the power to suspend or modify laws for months or even years, limiting access to courts and human rights bodies. Finally, the nature of the pandemic also means that normal oversight bodies, for example government committees, human rights commissions, even the courts, are not operating on a normal basis. So as rights may be violated, those who would normally aide in securing remedies are not available.

JGG: What key strategies could governments implement to ensure the respect of human rights when responding to health emergencies in the future?

Tim McSorley: Health experts have warned that not only should we expect resurgences of COVID-19, which could cause emergency measures to be reinstated or further tightened, but that we should also prepare for future pandemics. Therefore, it is essential that governments take immediate measures to instate human rights oversight bodies and empower existing human rights mechanisms to operate under exceptional circumstances.

In April, 301 Canadian organizations, academics and former politicians signed an open letter, organized by Amnesty International Canada, calling on all levels of government to urgently strengthen human rights oversight amid the COVID-19 pandemic. It presents a road map to ensuring that all sectors are represented and have meaningful, real-time input into emergency responses to the pandemic. Specifically, it calls for Indigenous knowledge-keepers, representatives of human rights commissions and others to have an official

advisory role, and for the creations of independent human rights oversight committees made up of First Nations, Métis and Inuit representatives, members of impacted communities, frontline service providers, human rights advocates, labour representatives, and academics. Unfortunately, we have yet to see the Canadian government take concrete steps in this direction. Parliamentary and other government committees may be providing a degree of oversight, but in Canada as elsewhere, these bodies have been forced to reduce or suspend their activities, meaning that the strongest responses are coming from regional, national and supranational human rights organizations, both governmental and from civil society.

For example, in Canada, provincial and federal human rights commissions have raised concerns and advocated for human rights protections; privacy commissioners and civil liberties groups have raised the alarm on digital contact tracing and other health-related surveillance. Meanwhile, civil society, labour and faith-based groups have advocated for the rights of refugees, migrants, workers, patients, health care workers, prisoners and others. The

lack of transparency and refusal to include these groups in policy discussions means they are forced to react rather than help guide the response to the pandemic.

The International Justice Resource Centre has done a formidable job of tracking guidance from supranational human rights bodies, ranging from the various UN human rights bodies and Special Rapporteurs, to the African Commission on Human and Peoples' Rights, the Inter-American Commission on Human Rights, the Council of Europe Commissioner for Human Rights, and the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. (See: [COVID-19 Guidance from Supranational Human Rights Bodies](#)). The result show that, predominantly, it is up to external bodies to track and stay on top of government responses, as is often the situation even outside of a pandemic. Therefore, if we are to strengthen our respect for human rights obligations in terms of emergencies as well as in times of calm, establishing more formal human rights oversight that can withstand the pressures of emergencies, (including providing resources, allowing for distance/virtual meetings, and involving them in decision-making during the crisis) would be a strong first step.

Opinión

PREGUNTAS DE JGG | RESPUESTAS DE IVANIA GALEANO

Oficial de Derechos Humanos de la OACNUDH Honduras. Su contribución es a título personal y no institucional.



JGG: ¿Cómo la incorporación de los enfoques de género y de derechos humanos en las respuestas de los gobiernos al COVID-19 pueden proteger los derechos (civiles, políticos, sociales, económicos y culturales) de los grupos marginados como mujeres, niñez, pueblos indígenas, personas LGBTI, adultos mayores y personas con discapacidad?

Ivania Galeano

Ivania Galeano: Como expresó el Secretario General de las Naciones Unidas “la pandemia de COVID-19, es una emergencia de salud pública, pero es mucho más. Es una crisis económica. Una crisis social. Y una crisis humana que se está convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos humanos ([Naciones Unidas, Abril 2020](#)).” ONU Derechos Humanos ha redactado una serie de directrices para que la respuesta al COVID-19 garanticen el enfoque de derechos humanos, las cuales incluyen ([Naciones Unidas, s.f.](#)):

- » Las estrategias sanitarias no deberían centrarse tan solo en los aspectos médicos de la pandemia, sino que deberían tratar las consecuencias que la respuesta sanitaria tiene en los derechos humanos.
- » Las facultades excepcionales deben ser empleadas para legitimar metas de salud pública, no utilizadas para aplastar a la oposición o silenciar el trabajo de periodistas o defensores de los derechos humanos.
- » Las medidas de contención, como el distanciamiento social o el aislamiento, deben tener en cuenta las necesidades de las personas que necesitan apoyo de otros para alimentarse, vestirse y asearse como personas con discapacidad.
- » Es imprescindible que el aumento del control de fronteras, las restricciones de viajes o las limitaciones a la libre circulación no impidan la huida de personas que escapan de la guerra o de la persecución.
- » Las medidas inmediatas de alivio económico pueden ser una protección frente a los efectos de la crisis.
- » Los estados deben tener en cuenta los distintos conceptos de salud dentro de la población indígena y deben considerar su consentimiento informado ante medidas preventivas frente al COVID-19.
- » Las personas privadas de libertad sufren un riesgo de infección mayor en caso de brote de enfermedad. Su situación debería tratarse de manera concreta en la planificación y respuesta a la crisis.
- » Las restricciones adoptadas en aras de la salud pública aumentan la posibilidad de que ocurran incidentes de violencia de género, en particular la violencia en la pareja o en el hogar.
- » Los servicios de apoyo y los albergues para mujeres víctimas de violencia de género deben seguir siendo una prioridad. Los mensajes relativos al COVID-19, deben incluir información sobre los teléfonos y servicios de emergencia.
- » Los servicios de salud sexual y reproductiva deberían considerarse como una prioridad, comprendido el acceso a la contracepción, los cuidados maternos y perinatales, el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, el aborto seguro y las vías de referencia seguras, incluso para las víctimas de la violencia de género.
- » Los servicios de salud y refugio para el colectivo LGBTI deben seguir funcionando durante la crisis. En particular los servicios de análisis y tratamiento vinculados al VIH, así como los albergues y servicios de apoyo para jóvenes del colectivo LGTBI en ambientes hostiles. También figuras influyentes deberían manifestarse en contra del discurso de odio y estigmatización dirigido contra colectivo LGTBI.

JGG: ¿Cuáles serían algunas buenas prácticas o casos ejemplares de medidas tomadas por gobiernos para proteger a las mujeres, niñez y personas LGBTI de la violencia en el contexto del confinamiento?

Ivania Galeano: En el caso de Honduras, ONU Derechos Humanos ha identificado varias medidas para proteger a las mujeres, niñez y personas LGTBI de la violencia en el contexto del confinamiento.

Un sub-clúster de violencia basada en género fue activado el 31 de marzo en el marco del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, con el objetivo de coordinar los esfuerzos de los diferentes actores humanitarios (incluyendo agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas, actores claves de gobierno, cooperación

En lo que refiere a garantizar **un enfoque de género** en la respuesta, los mecanismos de derechos humanos han relevado directrices que incluyen ([ACNUDH, Mayo 2020](#)):

- » Las respuestas eficaces al COVID-19, deben abordar las situaciones, perspectivas y necesidades específicas de mujeres, niñas y miembros del colectivo LGBTI, y velar por que ninguna de las medidas adoptadas discrimine por motivo de género.

internacional y organizaciones de sociedad civil) para contribuir a la prevención y atención de la violencia basada en género. El sub-cluster ha permitido abordar medidas para garantizar el acceso a líneas de emergencia a mujeres víctimas de violencia basada en género.

El Poder Judicial también ha mantenido como servicios judiciales esenciales a nivel nacional, el funcionamiento de los Juzgados de violencia domésticas y, en los lugares donde no existen estos juzgados especiales, los Juzgados de Paz han asumido la tramitación de estos casos de manera prioritaria.

Asimismo, con el apoyo de ONU Derechos Humanos, varias instituciones estatales (incluidos los Ministerios de Derechos Humanos, Desarrollo e Inclusión Social y Asuntos Exteriores) lanzaron un plan de cooperación estratégica para fortalecer el enfoque de derechos humanos en la respuesta del Estado al COVID-19, específicamente en el campo de protección social. Dentro de este marco, se ha establecido un grupo de trabajo de alto nivel al que ONU Derechos Humanos brinda asistencia técnica. Hasta ahora, ONU Derechos Humanos propuso y discutió un conjunto de medidas que el Estado puede adoptar para proteger a las personas más vulnerables. Las instituciones estatales también acordaron desarrollar una herramienta a través de la cual las inquietudes sobre los derechos humanos pueden compartirse directamente con las autoridades estatales correspondientes.

Finalmente, la Asociación de Municipios de Honduras, con el apoyo de UNFPA, se encuentra trabajando en la elaboración de planes municipales para garantizar la continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva y violencia basada en género en el marco de la COVID-19.

JGG: ¿Qué elementos son indispensables para asegurar que las voces de los distintos actores (p.e. organizaciones no gubernamentales, sector privado, comunidades y otros) sean tomadas en cuenta de manera eficiente en periodos de respuesta muy cortos como suele ser el caso en este tipo de emergencias?

Ivania Galeano: El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación ha relevado algunos criterios centrales para que el Estado, conforme a sus obligaciones en materia de derechos humanos, garantice la efectiva participación de diferentes sectores sociales en la respuesta al COVID-19. Estos criterios se pueden resumir en los siguientes puntos (ACNUDH, April 2020):

Amplía participación de la sociedad civil y la consulta ciudadana: Las consultas con la sociedad civil deben realizarse, si es posible, antes de que se adopten nuevas medidas durante la emergencia sobre todo cuando estas conlleven cualquier limitación de los derechos. Es inadmisibles declarar restricciones generales sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por ello, se deben prever exenciones para los actores de la sociedad civil, particularmente aquellos que realizan monitoreo de derechos humanos, los sindicatos, los servicios sociales que brindan asistencia humanitaria y los periodistas que cubren la gestión de la crisis.

Garantizar acceso a internet y el uso de los medios virtuales para la consulta con organizaciones de sociedad civil (OSC): Los Estados deben tomar medidas para garantizar que el acceso a Internet se extienda a toda la población mundial y que sea asequible, absteniéndose de restricciones como el cierre del internet o la censura en línea. En el contexto específico de las OSC, los Estados deben asegurarse de que puedan completar sus registros en línea y deben brindarles la oportunidad de participar, a través de foros en línea, en el desarrollo de políticas o procesos de consulta. En todos los casos, garantizar los derechos de reunión y asociación pacífica en línea requiere que los derechos de las personas a la privacidad se respeten y protejan por completo.

La responsabilidad de los distintos actores para incorporar las voces de los distintos sectores sociales: Las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y las

comunidades locales tienen un rol central en garantizar que la respuesta a la crisis incluya a todos los sectores sociales, sobre todo a los sectores en mayor vulnerabilidad, incluida la población indígena. Es importante contribuir a la circulación de información hacia los grupos en situación de vulnerabilidad y de dichos grupos hacia las autoridades. La información hacia poblaciones locales e indígena debe traducirse y difundirse ampliamente. Este abordaje puede garantizar que en las medidas adoptadas se pueda identificar a las personas que, de otra manera, se verían omitidas o marginadas. Esto será un medio para mejorar

la protección y el cumplimiento de los derechos, así como reducir la desigualdad en el contexto de la emergencia.

A manera de concluir, en ningún caso se pueden aplicar las leyes o reglamentos de manera discriminatoria, y la información que explica cómo se están poniendo en práctica las nuevas medidas debe estar a disposición del público y ser fácilmente consultada por todos. Se debe garantizar la supervisión independiente y la revisión de las medidas tomadas durante la crisis, a fin de garantizar la aplicación no discriminatoria de la ley durante toda la crisis.

JGG NETWORK news

Knowledge Sharing

Innovative Women's Rights Advocacy for Change

JGG and the School for International Development and Global Studies at the University of Ottawa co-organized a roundtable on women's rights advocacy. Ketty Nivyabandi, media associate at Nobel Women's Initiative, and Mayssam Zaaroura, Women's Rights Knowledge Specialist at Oxfam Canada discussed creative women-led advocacy initiatives to promote women's rights around the world on issues such as gender-based violence, social injustice, authoritarianism, and inequalities in the workplace. Innovative approaches included a mix of grassroots movements, pacific street protest, digital campaigning and advocacy at the policy level.



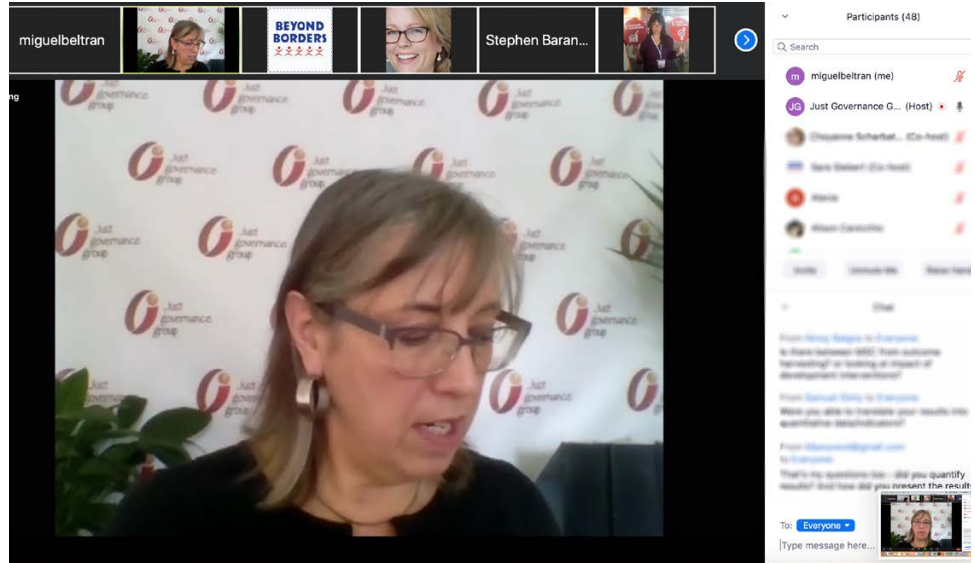
Co-Praxis 11 published in May 2020

JGG engaged student interns from the University of Ottawa to research, synthesize and analyze [Good Communication Practices to Transform Social Norms related to VAWG](#). This issue of Co-Praxis examined communication initiatives designed to transform discriminatory social norms that perpetuate gender-based discrimination and harmful practices, including violence against women and girls (VAWG).



Online roundtable during gLOCAL Evaluation Week

In June 2020 JGG organized a roundtable on using Most Significant Change (MSC) methodology for evaluating impacts in inclusive governance initiatives. The guest speakers shared the benefits and challenges of applying the Most Significant Change methodology in VAWG prevention and anti-corruption initiatives. Sara Siebert presented MSC in the adaptation of the [Raising Voices' SASA! methodology in Haiti](#). Cheyanne Scharbatke-Church, presented MSC with security and justice officials in the [Corruption, Justice and Legitimacy Program](#) implemented in the DRC. Lessons learned focused on implementing MSC in the contexts of the countries, inclusion of disadvantaged groups (women, girls and youth), selection of significant stories, reliability and validation of sensitive stories and time allocation.



Consultancies

JGG needs consultants in specific governance sub-sectors

If you have technical experience in the following areas, please send your CV to cv@justgovernancegroup.org:

- » anti-corruption;
- » gender-based violence, gender-based discrimination;
- » human rights and gender impacts of climate change and/or aspects of disaster risk reduction

We especially welcome consultants with experience in MENA, Asia Pacific, and South East Asia.

Inclusive Governance Programming in Honduras

JGG (Kimberly Inksater) is providing monitoring and technical advisory services to the Inclusive Governance Program of Global Affairs Canada in Honduras. The program includes projects promoting human rights protection and criminal justice with emphasis on victims of sexual and gender-based violence, including women, girls and LGBTI individuals.

Review of the Gender Equality Law in Viet Nam

Kimberly Inksater was contracted individually by UNFPA Viet Nam to review the Law on Gender Equality and its implementation over a period of twelve years. The two-year review process, coordinated by UNFPA and the Ministry of Labour and Social Affairs, culminated in the first quarter of 2020 after final revisions to the report based on feedback from consultative workshops with central and provincial stakeholders in Viet Nam.

Support to an evaluation of Global Environmental Facility projects

José Miguel López was contracted individually by the Independent Evaluation Office (IEO) of the Global Environmental Facility (GEF) to support the evaluation of GEF's institutional policies on stakeholder engagement, gender equality and environment and social safeguards. The objective of the evaluation is to assess strategic alignment, operational relevance and implementation in relation to three policies that promote inclusivity, engagement and avoidance of undue harm to stakeholders on environmental projects. José Miguel Lopez is supporting the evaluation team with a portfolio review of a sample of projects across different GEF's implementing agencies, focal environmental areas and geographical regions.

Justice Undertakings for Social Transformations in Jamaica

JGG (Kimberly Inksater) completed 2.5 years of monitoring and advisory work for Global Affairs Canada by engaging with the JUST programme partners in Jamaica to prepare a sustainability report card. The report card assessed the sustainability of 12 sample criminal justice reform initiatives supported by the programme during its implementation period from 2012-2020.



Just Governance Group

Contact Information

Kimberly Inksater, Director: kj.inksater@justgovernancegroup.org

José Miguel López, Staff Consultant: jm.lopez@justgovernancegroup.org

Carmen Beatriz Ruiz (Bolivia): cb.ruiz@justgovernancegroup.org

Skype: JustGovernanceGroup

Tel: 613-729-5612

info@justgovernancegroup.org



justgovernancegroup.org